S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 107
O R D I N A R I A
JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del jueves diecisiete de octubre de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. Los señores Ministros José Fernando Franco González Salas y Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistieron a la sesión, el primero por estar disfrutando de su período vacacional y la segunda en virtud de cumplir una comisión de carácter oficial.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número ciento seis ordinaria, celebrada el martes quince de octubre de dos mil trece.

Por unanimidad de nueve votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves diecisiete de octubre de dos mil trece:

I. 44/2012

Acción de inconstitucionalidad 44/2012, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, demandando la invalidez del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veinticuatro de julio de dos mil doce. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 51, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, adicionada mediante el ‘Decreto por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de julio de dos mil doce.”*

La señora Ministra ponente Luna Ramos mencionó que la semana pasada mandó algunas adiciones del proyecto a las ponencias con una definición elemental del interés jurídico y legítimo en la justicia administrativa local, por estar listada una contradicción de tesis entre la Primera y la

Segunda Salas que determinará lo conducente al interés legítimo en el juicio de amparo, que si bien no es el mismo ámbito proporcionará una definición elemental para la resolución del presente asunto. Por otro lado, expuso las consideraciones del proyecto relativas a que la acción es oportuna, que la Suprema Corte es competente, que fue presentada por parte legitimada y que no se hicieron valer causales de improcedencia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto, contenida en los considerandos primero, segundo y tercero, relativos a la competencia, la oportunidad y la legitimación, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de nueve votos.

La señora Ministra ponente Luna Ramos presentó el estudio de fondo del proyecto, para lo cual explicó que se transcribió el artículo impugnado que cita “En los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar actividades reguladas deberá acreditar su interés jurídico, mediante la correspondiente concesión, licencia, permiso, autorización o aviso”; que se narraron los antecedentes legislativos en materia contenciosa administrativa, relativas al interés legítimo o jurídico para promover un juicio: a partir de dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y uno, el artículo 32 establecía un interés amplísimo; en enero de mil novecientos setenta y tres se reformó el artículo 32, estableciendo el interés legítimo; en mil novecientos setenta y ocho se reforma nuevamente el

artículo 33, anteriormente 32, determinando nuevamente un interés genérico; en mil novecientos ochenta y seis, el artículo 33 decía que sólo podrían intervenir en el juicio las personas que tuvieran interés jurídico; en mil novecientos noventa, el artículo 34 retoma como supuesto de procedencia el interés legítimo; finalmente, en dos mil nueve se reforma el artículo 51 en los términos en los que ahora se combate.

Posteriormente se transcribió el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal que define el interés legítimo como el “Derecho de los particulares para activar la actuación pública administrativa en defensa del interés público y la protección del orden público” y el interés jurídico como el “Derecho subjetivo de los particulares, derivado del orden jurídico que le confiere facultades o potestades específicas expresadas en actos administrativos, tales como concesiones, autorizaciones, permisos, licencias, registros y declaraciones”. A partir de esto, se puede individualizar la afectación a un derecho subjetivo al encontrarse en una situación especial frente al orden jurídico, permitiéndole accionar para defender un interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo en sí mismo.

Luego, se declaran infundados los conceptos de invalidez referentes a la violación de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal, así como 8, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se

propone determinar que no se viola el 17 constitucional porque el derecho de acceso a la justicia está limitado a la legislación que regule el procedimiento respectivo, debiendo garantizar el orden público y el interés social, así como que sea pronta, completa e imparcial, para lo cual se cita la exposición de motivos de la reforma del segundo párrafo impugnado, en la cual el legislador destaca la importancia de contar con un control de establecimientos regulados que ameriten permisos, licencias o concesiones, por ello, para estar en aptitud de impugnar algún acto de autoridad referido a este tipo de actividades, debe contarse con el interés jurídico, demostrado con el respectivo permiso, licencia o concesión. Del mismo modo, no se viola el 14 constitucional porque no se prohíbe o limita su derecho probatorio, de formular alegatos ni de defensa. Luego, tampoco se viola el 1 constitucional ni el 8, punto 1, de la Convención en cita, porque en dicha exposición de motivos se evidencia la importancia de establecer en este tipo de juicios la obligación de acreditar el interés jurídico en actividades reguladas.

Por estas razones, indicó que el proyecto declara la validez del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

El señor Ministro Cossío Díaz consideró adecuada la remisión del alcance en virtud de la futura discusión en torno a la contradicción de tesis 111/2013. Sugirió eliminar de la página treinta y seis de las hojas en alcance la frase

“Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada” y de la página treinta y siete lo que cita “pues simplemente lo coloca, como integrante de una colectividad, en la posibilidad de defender, en su beneficio, intereses colectivos que no se han materializado en una situación concreta”, en virtud de que son elementos que serán materia de dicha contradicción de tesis.

Anunció un voto concurrente para precisar que no se trata de una restricción, por lo que no estimó necesario realizar un análisis de razonabilidad, máxime cuando se cuenta con elementos objetivos encaminados a salvaguardar un interés legítimo y jurídico, a partir de la posición que guarde frente al orden jurídico.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto en los términos sugeridos por el señor Ministro Cossío Díaz, porque no cambia la idea central y será materia de la contradicción de tesis 111/2013.

Respecto de las restricciones, precisó que se asentaron en el proyecto al contestar el concepto de violación esgrimido, pero que no tendría inconveniente en asentar que lo concerniente a la distinta posición frente al

orden jurídico se estudie solamente para abundar sobre el tema.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estimó inconstitucional el precepto combatido por desatender la prohibición constitucional de regresividad en su protección, consagrada en el artículo 1 constitucional, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por tanto, la libertad de configuración del legislador se ve restringida. Indicó que, aun cuando ésta prohibición no es absoluta, en principio se presume como inconstitucional todo retroceso, exceptuando aquellos sometidos a un control judicial, para lo cual el Estado debe demostrar razones imperiosas que hagan necesario e indispensable dicho retroceso.

Consideró que a pesar de que el principio de progresividad se ha vinculado con derechos económicos, sociales y culturales, nuestro sistema constitucional no lo delimita, permitiéndose la progresividad en todos los derechos humanos. Por ello, si el Estado está obligado a ampliar progresivamente el acceso de las personas a la jurisdicción, por ser ésta el instrumento de protección de los derechos, el artículo impugnado viola la prohibición de regresividad; además, en la exposición de motivos de la reforma de dos mil nueve que restableció el interés legítimo, el legislador tenía por objetivo disminuir las cargas de trabajo del Tribunal Contencioso Administrativo para procurar

justicia eficaz y expedita, sin embargo, no justificó debidamente la regresión de la medida ni creó otros dispositivos menos regresivos para atenuarla, por lo que, tras un test estricto de proporcionalidad, la medida es inconstitucional.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó conforme con el proyecto, pues el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, sino que encuentra sus límites en el orden público y el interés social que se plasman en reglas y procedimientos a los que deben sujetarse los gobernados. Con esto, el interés jurídico requerido en el artículo combatido no deviene nugatorio este derecho, siempre y cuando procuren salvaguardar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y que sean proporcionales a dicho fin, cuestión que se cumple en el caso. Finalmente, la exigencia del interés jurídico no constituye un obstáculo para el acceso a la justicia del gobernado, pues sólo es necesario acreditarlo en determinados supuestos, como cuando pretende obtener una sentencia que le permita realizar actividades reguladas que precisan de un derecho público subjetivo, evitando un despliegue innecesario de funciones jurisdiccionales y garantizando la justicia pronta y expedita.

El señor Ministro Pérez Dayán coincidió con lo postulado por el señor Ministro Valls Hernández. Añadió que el artículo 122, base primera, constitucional, faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para regular

actividades relacionadas con el orden público, por lo que los requisitos de estas disposiciones deben ser cumplidos por los interesados en el ejercicio de dichas actividades, en aras de garantizar el beneficio de la colectividad.

Partiendo de esta idea, debe otorgarse la posibilidad de que, quien ejerza estas actividades, se defienda cuando la autoridad las limite o cancele; por ello, consideró que la disposición impugnada refleja congruencia con el sistema constitucional, pues no restringe el acceso a la justicia, sino evita que se abuse de ella.

Respecto del comentario del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, sostuvo que la medida no sólo persigue eliminar el rezago del tribunal, sino que evita que se ejerza una actividad regulada con una sentencia aun sin haber cubierto los requisitos establecidos en ley vinculados constitucionalmente, sustituyendo a las autoridades administrativas por los tribunales a través de sus fallos. Señaló que dicho tema se ha discutido recientemente en la Segunda Sala a partir de la contradicción de tesis 418/2009.

En este tenor de ideas, infirió que el proyecto reconoce el acceso a la justicia, reservándolo a aquellos que se encuentran en el supuesto hipotético de la norma y preservando su derecho, no constituyendo el que no tienen; por lo que se mostró convencido por él.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se inclinó en favor del proyecto, aunque con distintas consideraciones. Le

pareció que se trata de la limitación de un derecho, pero que bajo un escrutinio ordinario, la reforma combatida aprueba el examen de legalidad, necesidad y proporcionalidad constitucionales.

Manifestó preocupación respecto de que, a partir de una interpretación literal del precepto combatido, cuando el título del derecho mismo fuera materia de la litis, no se podría acreditar el interés jurídico en el juicio, lo que sería inconstitucional.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó conforme con el proyecto. Respecto de las regresiones, distinguió entre restricciones permitidas y regresiones a los derechos, aduciendo que las primeras no sólo se derivan de la constitución, sino del artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto al caso, estimó que no se trata de una restricción, más bien de un requisito procesal fundamental, ya que si alguien defiende un derecho, debe acreditar tener la facultad de ejercer una actividad regulada, ya sea con la licencia, el permiso o la concesión otorgados por la autoridad administrativa; puso como ejemplo de esto el interés jurídico en el juicio de amparo directo.

Se mostró de acuerdo con las observaciones del señor Ministro Cossío Díaz, Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena, sugiriendo además que se debería aclarar que el tema deriva de la defensa de un derecho previamente reconocido en una licencia, concesión o permiso, no cuando se esté

solicitando la expedición de éstos, porque se constituiría una petición de principio.

El señor Ministro Pardo Rebolledo interpretó el artículo impugnado como el caso de excepción al establecimiento de una norma general, por lo que no lo considera violatorio del principio de acceso a la justicia ni regresivo. Coincidió en que la finalidad de la norma no es evitar el rezago de los órganos contenciosos administrativos sino impedir que se promuevan juicios por alguien quien no tiene la autorización, concesión o permiso correspondiente.

Compartió la duda del señor Ministro Aguilar Morales, sumándose a la petición de que se mencionen claramente las hipótesis en las que se reconocerá el interés jurídico de quien impugne una negativa u omisión en la expedición de la autorización respectiva.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que cuando un tema de procedencia involucra el fondo, es preciso atender a éste para llegar a una conclusión debida, con la limitación de que una sentencia no haga las veces de una licencia, que es el propósito que pretende alcanzar la norma combatida, respetando el principio de acceso a la justicia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que no se pueden variar los argumentos que el legislador dio para justificar la medida, y que entre ellos no se encuentra los que ha escuchado ahora, tomándolos como plausibles y opinables. Estimó que, tratándose del principio de no

regresividad, el test debe ser estricto. Finalmente manifestó que, a pesar de la interpretación conforme que han propuesto los señores Ministros, persiste el problema de regresividad en el núcleo duro de la reforma a la norma porque, precisamente para esos casos, ya había un derecho de acceso a la justicia a través del interés legítimo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se posicionó en favor del proyecto con las modificaciones realizadas, distinguiendo solamente los efectos de las consecuencias procesales de la norma vigente con la anterior, mas siempre procurando el acceso a la justicia.

La señora Ministra ponente Luna Ramos indicó que se ocupará en su intervención de las razones que ha dado el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea para estar en contra del proyecto.

En relación con el argumento relativo a que la consulta implica violar el principio de progresividad en términos del párrafo tercero del artículo 1° constitucional, señaló que, de acuerdo con los trabajos legislativos que dieron origen a la reforma de derechos humanos y a la doctrina, este principio sólo es aplicable a éstos y no a las garantías para su protección, en la inteligencia de que el acceso a la justicia constituye, por carácter adjetivo, una garantía y no un derecho, pues se acude a los tribunales para que éstos preserven los derechos y no para hacer valer cualquier planteamiento en ejercicio de la garantía de audiencia.

Por otro lado, señaló que el hecho de que el legislador haya expresado una razón que pueda no ser válida en opinión de este Alto Tribunal, no implica que éste haya violado la garantía de fundamentación y motivación en el caso, como si se tratara de un acto jurisdiccional o administrativo, pues el legislador, en respeto a esta garantía, únicamente tiene que acreditar su competencia para legislar, en el entendido de que la materia de la que se ocupa amerita ser regulada, lo que en este caso se verifica, sin que el reconocimiento de validez de la norma implique modificar la fundamentación y la motivación que dio la autoridad legislativa, máxime que la validez constitucional de una norma no depende de que aquellas se hayan expresado

Estimó que en los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar actividades en establecimientos regulados deberá acreditar su interés jurídico mediante la correspondiente concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, ya que se pretende que no acudan al juicio contencioso administrativo aquellos particulares que temen que la autoridad clausure su establecimiento por falta de dicho permiso o licencia, pues la función del tribunal administrativo es hacer respetar los derechos que la autoridad competente les ha otorgado, de manera que, a través de una suspensión, los establecimientos que cuenten con autorización continúen abiertos mientras se determine si se ha violado o no alguna disposición reglamentaria.

De esta manera, consideró que aquellos particulares que no cuentan con un permiso no pueden acudir al tribunal contencioso administrativo, vía interés legítimo, para combatir un acto de molestia que recae sobre su establecimiento irregular, pues de lo contrario la suspensión que en esos casos pudiera otorgarse implicaría que el tribunal otorgue el permiso respectivo, sustituyéndose así a la autoridad administrativa.

Aclaró que cuando se impugna la negativa de otorgar un permiso o licencia, en realidad no se solicita la suspensión del acto sino que se exige el otorgamiento de dicha autorización, y conforme a la jurisprudencia no puede aducirse en este caso un problema de procedencia relativo a la falta de interés jurídico, dado que ello se encuentra vinculado con el fondo del asunto, pues si el tribunal lo invocara llegaría a la conclusión absurda de sobreseer en el juicio por la razón de que no se puede resolver sobre si procede el otorgamiento de la licencia cuando aún no se tiene.

De esta manera, sugirió que se precisara en el proyecto que la exigencia de acreditar el interés jurídico únicamente se aplicara en el caso de que se pretenda defender un derecho ya reconocido.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que no se ocupará de los razonamientos de la señora Ministra Luna Ramos, y que únicamente dejaría a salvo su criterio, en el sentido de que entiende por garantías a los instrumentos

procesales para la protección de los derechos humanos, como el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, los juicios en materia político-electoral, y otras figuras a cargo de las legislaturas de los Estados. Señaló que no corresponde con la doctrina y con la práctica moderna conceptualizar el debido proceso como una garantía y que su violación, por tanto, no afecte derechos fundamentales.

En este sentido, señaló que el debido proceso, la defensa adecuada, la fundamentación y motivación y el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva son, quizá, los derechos humanos más importantes, porque a través de ellos se protegen otros derechos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, contenida en el considerando cuarto, relativo al estudio de fondo, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y reservó su derecho de formular voto particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena reservó su derecho de formular voto concurrente. El señor Ministro Cossío Díaz se ausentó del salón de sesiones durante la toma de esta votación.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Se decretó un receso a las trece horas con quince minutos, del cual se reanudó la sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 74/2011

Controversia constitucional 74/2011, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, demandando la invalidez de la omisión legislativa consistente en la discusión y aprobación de las disposiciones legales en materia constitucional, judicial y municipal, que establezcan el procedimiento, funcionamiento y atribuciones del órgano de control de constitucionalidad a nivel local que dirima las controversias del municipio frente al gobierno del Estado, en los términos del artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo Segundo de las disposiciones transitorias del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. En el proyecto formulado por la señora Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León deberán actuar en los términos especificados en el último considerando de la presente ejecutoria.”*

El señor Ministro Presidente Silva Meza informó que la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se encuentra desempeñando una comisión de carácter oficial y que el señor Ministro Pérez Dayán se ha ofrecido para hacerse cargo del asunto.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán precisó que, en el presente asunto, el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, demandó la omisión en la discusión y aprobación de las disposiciones legales que establezcan el procedimiento o funcionamiento y atribuciones del órgano de control constitucional a nivel local que dirima las controversias de los municipios frente al gobierno del Estado, en los estrictos términos del artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo Segundo de las disposiciones transitorias del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Indicó que en el proyecto se reconoce la existencia de esta omisión legislativa reclamada y, por consiguiente, se propone ordenar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, que la subsanen dentro del próximo período ordinario de sesiones.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración de los miembros del Tribunal Pleno la propuesta del proyecto, contenida en los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, relativos

respectivamente a la competencia, la precisión de la litis, la oportunidad, la legitimación activa, la legitimación pasiva y a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Valls Hernández sugirió la eliminación del estudio contenido en la página doce del proyecto respecto de la causal de improcedencia hecha valer por el Ejecutivo del Estado, denominada “inexistencia de la omisión”, considerando que, de la lectura integral del escrito de contestación de demanda del Gobernador del Estado de Nuevo León, se advierte que en realidad planteó su falta de legitimación pasiva en el juicio, al no serle atribuible la falta de expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 95 de la Constitución local, y al haber cumplido, en todo caso, con lo que a su competencia corresponde en cuanto a la presentación de la iniciativa respectiva.

Asimismo, señaló que tanto el presidente municipal como el síndico municipal, ambos del Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, tienen facultades para representar de forma independiente al Municipio en términos de dispuesto en los artículos 27, párrafo primero, y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicha entidad federativa, por lo que aun cuando coincide con la conclusión a la que arriba el proyecto, se aparta de las consideraciones que se hacen en el segundo párrafo de la foja diecisiete, y el primero de la página dieciocho, en el sentido de que dicha representación

recae necesariamente, de manera conjunta, en ambos funcionarios.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó que el Poder Legislativo del Estado manifestó que debe decretarse el sobreseimiento con la causal de improcedencia consistente en que el Municipio actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, toda vez que teniendo la facultad para presentar iniciativas del ley, fue omiso en hacerlo, con lo que motivó que persistiera la omisión que impugna, precisando que en el proyecto se desestima porque la facultad de presentar iniciativas no constituye un recurso legalmente previsto para colmar la omisión que se atribuye al Poder Legislativo.

Asimismo, expuso que, conforme al proyecto, tampoco se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de legitimación del Municipio actor, derivada de que no se le ocasiona afectación jurídica alguna con la omisión impugnada; lo anterior, ya que está relacionada con el fondo del asunto, máxime que dicho Municipio aduce que se infringe el artículo 115 constitucional.

Indicó que, si bien está de acuerdo con esta parte, se ha omitido en el proyecto dar contestación a la causal de improcedencia relativa a la verificación de cosa juzgada en términos del artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, aducida por el Poder Legislativo local en la contestación de la demanda, en el sentido de que el reclamo a dicho Poder de atender el

mandato de la Ley Fundamental de la Nación, derivado de diversos artículos constitucionales que se citan, ya fue atendido por este Máximo Tribunal, aunado a que actualmente se está en proceso legislativo el expediente 474, relativo a la Ley Reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Señaló que, aun cuando sea verdad que dicho argumento no se planteó en el capítulo de causas de improcedencia de la contestación de demanda respectiva, ello no es óbice para que proceda su estudio, dado que se trata de una cuestión de orden público que se aprecia del planteamiento general e integral de la contestación. Al respecto, sugirió considerar que la causa de improcedencia de que se trata no se actualiza, porque el reclamo que en particular se hace valer en la presente controversia constitucional no es igual al que se formuló en la diversa 46/2002, pues conforme al considerando segundo, donde se precisa la litis, se advierte que ésta consiste en cuestionar la permanencia del vacío legislativo en su totalidad respecto de la Ley Reglamentaria del artículo 95 de la Constitución del Estado de Nuevo León, además de que la resolución que había obligado a emitir las normas correspondientes se consideró cumplida por el Tribunal Pleno.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán consideró puestas en razón y, por ende, atendibles las observaciones manifestadas por los señores Ministros Valls Hernández y Aguilar Morales, por lo que consideraría ambas para, por

una parte, abordar el análisis de la causa de improcedencia relativa a la falta de legitimación pasiva del Gobernador de la entidad, eliminando la expresión “inexistencia de la omisión” bajo la cual se planteó su estudio y, por otra parte, atender la diversa causal relativa a la cosa juzgada, a la cual se dará contestación en los términos que han sido sugeridos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, contenida en los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, relativos respectivamente a la competencia, la precisión de la litis, la oportunidad, la legitimación activa, la legitimación pasiva y a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, en contra de las consideraciones en cuanto a la legitimación activa; Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. El señor Ministro Cossío Díaz se ausentó del salón de sesiones durante la toma de esta votación.

El Tribunal Pleno acordó continuar el análisis del asunto en la próxima sesión.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto continuaría en lista, para entrar al estudio del considerando séptimo que contiene la propuesta de fondo, levantando la sesión a las trece horas con cincuenta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del

Sesión Pública Núm. 107 Jueves 17 de octubre de 2013

Pleno para acudir a la próxima sesión ordinaria del día lunes veintiuno de octubre de dos mil trece a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.